

4417/19

EN LO PRINCIPAL: **REPOSICIÓN**; OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTO.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Región Metropolitana de Santiago

Comisión de Evaluación Ambiental Región Metropolitana

OFICINA DE PARTES

1º Destino:

Reposición

14/02

2º Destino:

JVR

MARCELA ALEJANDRA MELLA ORTIZ, chilena, cédula nacional de identidad N° 10.930.495-6, domiciliada en Los Olmos N° 10.998, El Manzano, comuna de San

3º Destino:

José de Maipo, a Uds. respetuosamente digo:

4º Destino:

Trámite:

José de Maipo, a Uds. respetuosamente digo:



De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 39 de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, vengo en deducir recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° 044/2019, de fecha 23 de enero de 2019, publicada en el Diario Oficial con fecha 7 de febrero en curso, que dio inicio a procedimiento de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental N° 256/2009, de fecha 30 de marzo de 2009, del proyecto Hidroeléctrico "ALTO MAIPO", que fundo en los siguientes argumentos:

I. EN CUANTO AL PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES:

1º.- En resolución impugnada se otorga un plazo de 10 días hábiles a contar de la publicación de la misma para que "la ciudadanía" pueda *"examinar el expediente del procedimiento"*, y para que dentro del mismo plazo formule observaciones ante la Directora Regional del SEA;

2º.- Que en la misma resolución, en el punto 3, se dispuso **oficiar a la Dirección General de Aguas, en adelante DGA**, para que *"en un plazo de 10 días hábiles"* contados desde la notificación de la referida resolución, o sea, **en el mismo plazo que se otorga a la ciudadanía para examinar los antecedentes y formular observaciones**, este organismo informe respecto del proceso de revisión de la RCA;

3º.- Que mediante Ordinario N° 153, de fecha 8 de febrero en curso, la DGA solicitó aumento del plazo para emitir su informe ***"que no debería exceder del 20 de marzo"***;

Que, resulta a todas luces evidente e incuestionable que, atendida la materia respecto de la cual se acogió la revisión de la RCA, es indispensable contar con el informe de la DGA, por lo que se hace necesario que se resuelva que el plazo para formular observaciones comience a computarse sólo desde que se cuente con dicho antecedente;

4º.- A lo anterior se suma que en el punto 5 de la resolución en cuestión **se ordenó al titular del proyecto presentar con fecha límite el 13 de febrero** próximo los antecedentes que allí se indican, que son:

a) cambios de capacidades de los sistemas de tratamiento de aguas de afloramiento y sus condiciones de descarga;

- b) modelo hidrogeológico actualizado;
- c) actualización de medidas de control de los afloramientos que surgen de la construcción de los túneles del PHAM;
- d) medidas de monitoreo y seguimiento ambiental;
- e) plan de contingencia.

Que lo anterior implica que corriendo el plazo para formular observaciones el titular del proyecto debe presentar sus antecedentes, por lo que claramente el plazo de 10 días hábiles otorgado al efecto no resulta ser tal, sino que uno muy inferior incluso al establecido en la ley.

5º.- Que, en efecto, el artículo 39 de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, citado en la resolución que se impugna, establece, en síntesis, en lo pertinente, que el órgano al que corresponda la resolución de un procedimiento podrá ordenar un **periodo de información pública**, que se anunciará en el Diario Oficial o en un diario de circulación nacional, a fin de que *cualquier persona* pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se indique, debiendo en la referida publicación señalarse el lugar de exhibición y plazo para formular observaciones, "**EL QUE NUNCA PODRÁ SER INFERIOR A 10 DÍAS.**"

6º.- Pues bien, lo cierto es que la autoridad fijó el plazo mínimo, tanto para el examen de los antecedentes, como para formular observaciones, lo que no resulta razonable, por lo antes señalado, puesto que **el plazo debiera comenzar a computarse sólo desde que se encuentren a disposición de la ciudadanía todos los antecedentes que permitan ejercer el derecho a opinión informada.**

Que lo anterior se justifica no sólo para poder ejercer efectivamente el derecho a participación informada de la comunidad, sino que además para el estricto cumplimiento del **principio de imparcialidad y objetividad** con que debe actuar la autoridad, respetando el **principio de probidad**, tanto en la substanciación del procedimiento, como en la decisión del mismo, que importa observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con **preeminencia del interés general**, por sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, inciso segundo, de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, que tiene directa relación con el principio de servicialidad del Estado, consagrado en el artículo 1º, inciso cuarto, de la Constitución Política, en virtud del cual **el Estado está al servicio de la persona humana.**

Sobre el punto es necesario considerar la **notable falta de igualdad de armas** en que se encuentra la ciudadanía frente a los titulares del proyecto, que cuentan con

los recursos económicos para contratar numerosos asesores, en contrapartida con la comunidad, que se encuentra absolutamente desvalida y a merced de las autoridades de turno, ante la falta de una Defensoría Ambiental que ejerza un rol protector en la materia.

Cabe señalar que en otros procedimientos de revisión de RCA conforme al artículo 25 quiquies examinados la autoridad concedió un plazo mayor al otorgado en este procedimiento.

Que, finalmente, al respecto cabe hacer presente que la participación ciudadana fue uno de los principios que inspiraron la modificación de la actual legislación ambiental, por lo que es en este contexto, y a fin de garantizar los Principios de imparcialidad y transparencia, establecidos en la Ley 19.880, que **se impone que se acceda a lo solicitado, disponiendo que el plazo para examinar el procedimiento y formular observaciones comenzará a computarse sólo una vez que se cuente con todos los antecedentes ordenados en la referida resolución, que se fije un plazo de 15 días hábiles para tal efecto**, a fin de no producir indefensión, al ser absolutamente insuficiente el plazo concedido, **y que se fije un plazo inferior al señalado por la DGA para dar cumplimiento a lo ordenado, no superior a 15 días.**

No acoger esta solicitud importaría que la autoridad no estaría garantizando una efectiva participación ciudadana en el procedimiento de revisión, lo que desde ya infringe los principios antes invocados, además de garantías constitucionales.

II. EN CUANTO A LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN RECHAZADAS:

1.- Incumplimiento del plazo de construcción y cambio climático.

Se solicitó la revisión de la RCA atendido que el proyecto ha sobrepasado con creces el plazo de 5 años previsto originalmente, extendiéndose a la fecha a prácticamente el doble, motivo por el que se estima necesario reevaluar todas las medidas de mitigación y compensación consideradas en su oportunidad, ya que éstas se plantearon en otro escenario que, claramente ha variado, como el cambio climático y sus efectos.

En el punto 7.1 se desestimó la revisión por el aumento del plazo de construcción, argumentando que **la extensión de la fase de construcción no implica necesariamente una alteración sustantiva de las variables ambientales contempladas en el plan de seguimiento**, sin dar mayor fundamentación, por lo que se estima que **no cumple con el requisito de encontrarse suficientemente motivada**, sobretudo porque la extensión del plazo en hasta ahora casi el doble del originalmente considerado, implica de suyo una mayor cantidad de externalidades negativas no previstas, como vertidos de aguas servidas de faenas, tránsito de personas y maquinarias, etc. con la afectación consecuente de la normalidad del sector, a lo que se suma la variable no considerada del cambio climático, que, como ha señalado el Presidente Piñera *"llegó para quedarse"*, y que

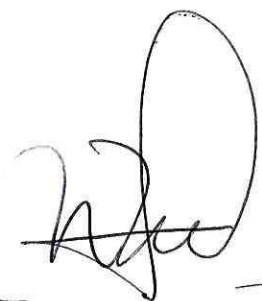
indudablemente generará efectos no previstos en una cuenca ya de por sí sobrecargada por la explotación de distintas actividades.

La megaintervención en los afluentes del valle haciendo tronaduras en la alta cordillera, ejecutando grandes movimientos de tierra, amenazando glaciares "protegidos" ambientalmente, afectando un área silvestre protegida, e incluso, contaminando con metales pesados las aguas de la cuenca del Maipo, que da suministro de agua a gran parte de la región Metropolitana, y que ha puesto y pone en riesgo el suministro de agua de más de 6 millones de personas de forma significativa, es una variable que amerita ser revisada.

Los estudios y proyecciones sobre cambio climático para la región son devastadores y contemplan impactos ambientales que ya se empiezan a percibir. Vivimos un proceso de desertificación, disminución de precipitaciones, escasez hídrica y aumento en las temperaturas. En este escenario, **la construcción del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo viene siendo un agravante y acelerador para este fenómeno de cambio climático que no fue contemplado en ningún estudio de impacto del proyecto a la hora de realizar su evaluación ambiental.**

Los diversos aluviones registrados en la zona con consecuencias fatales y enormes pérdidas materiales, jamás registradas son una clara evidencia del impacto que el proyecto ha generado, por lo que se requiere la revisión de la RCA, a fin de establecer de qué manera la alteración de los cursos de agua afectarán el entorno, y de qué manera se proyecta el cambio climático para la zona central y cómo se conjugan estos dos factores, cuestión no considerada en el plan de seguimiento y que es necesario evaluar.

Sobre el particular, la resolución impugnada, en el 7.2, rechaza la revisión por este factor, señalando que el aumento de la temperatura y disminución de las precipitaciones y la eventual variación a causa de esto del caudal ecológico del río Maipo se trataría de una variable de la fase de operación que no correspondería evaluar en esta etapa, ya que no comienza aún el seguimiento del proyecto. La argumentación no se hace cargo de si el cambio climático puede constituir una variable sustancial a considerar, y estima que por el hecho de existir un Programa de Monitoreo de Caudal ecológico el tema estaría a resguardo, lo que resulta absurdo, puesto que si efectivamente el cambio climático está haciendo sentir sus estragos con temperaturas extraordinariamente altas, lluvias abundantes en el norte del país, en zonas reconocidamente desérticas, resulta evidentemente que es un factor no previsto, que puede alterar sustancialmente las externalidades negativas del proyecto originalmente previstas.



Marcelo Melle Ortiz
10 930 495 - 6
r 56 990 949063